

16 95

CASTAÑO & ASOCIADOS
VICTOR DANIEL CASTAÑO OVIEDO
ABOGADO ESPECIALIZADO
Email: victordcastano@hotmail.com

Señor:

JUEZ ADMINISTRATIVOS DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE CALI

E S D

Ref: DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Dte: MARIA SONIA GARCIA GARCIA

Ddo: DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA

VICTOR DANIEL CASTAÑO OVIEDO, mayor de edad, domiciliado y residente en esta Ciudad de Cali, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 16.660.807 expedida en Cali, Abogado titulado y en ejercicio, con Tarjeta Profesional No. 94.164 del C.S.J., obrando en calidad de apoderado del señor(a) **MARIA SONIA GARCIA GARCIA**, quien se identifica con la CC **29484168**, y de conformidad con el poder que adjunto, manifiesto a Usted que, por medio del presente escrito, adelanto ante su despacho demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra del **Departamento del Valle del Cauca**, representado actualmente por el señor(a) **DILIAN FRANCISCA TORO TORRES**, en su condición Gobernador de la entidad territorial, o por quien haga sus veces, para que mediante sentencia se provean favorablemente las siguientes:

DECLARACIONES Y CONDENAS

PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la **Resolución No 8705 del 28 de octubre de 2015**, por medio de la cual se reconoce la sanción moratoria del personal administrativo de régimen anualizado, en virtud del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos – Ley 550 de 1999, entre otros al señor(a) **MARIA SONIA GARCIA GARCIA**, por la mora en la consignación de los excedentes de las cesantías anualizadas al fondo de cesantías al cual pertenece o perteneció el actor, y que le fueran consignadas, en el año 2010, conforme lo manifiesta el ente territorial en el propio acto demandado.

SEGUNDO: DECLARAR que la entidad demandada debe liquidar nuevamente a mi patrocinado(a) la **SANCION MORATORIA** de que trata la Ley 50/90, en su artículo 99 numeral 3, sobre el **100%** del valor adeudado, y no como lo pretende pagar en un porcentaje del 70%, para lo cual deberá tener sumo cuidado e incluir las **horas extras, dominicales, festivos y los recargos nocturnos correspondientes al año 2.000** que no fueron liquidados, así como la **sanción correspondiente al años 2007**, equivalente a **365 días de mora**, y la del año 2008, equivalente, para los afiliados a **fondos privados** de cesantías, a **90 días de mora**, y para los afiliados al **Fondo Nacional del Ahorro**, a **645 días de mora**, ya que tampoco fueron liquidadas.

TERCERO: DECLARAR que se **INAPLIQUE POR INCONSTITUCIONAL** el contenido del Acuerdo de reestructuración de pasivos, en que se ampara la **Resolución No 8705 del 28 de octubre de 2015**, respecto a reconocer solamente el 70% de la deuda, pues se evidencia que con los mismos se evade **total o parcialmente** la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anualizadas al fondo de cesantías en que se encontraba afiliado a la época en que la entidad territorial estaba en la obligación de hacerlo, en consonancia a lo esgrimido en

la Jurisprudencia del Consejo de Estado, tal y como lo expuso La Sección Segunda, Subsección B, con Ponencia de la Dra Bertha Lucia Ramírez de Páez, en sentencia de 17 de enero de 2011.

CUARTO: CONDENAR a la entidad demandada, a que pague en favor del actor(a) la **SANCION MORATORIA** que trata la Ley 50/90, en su artículo 99 numeral 3, debidamente liquidada, por la mora en la consignación de los excedentes de las cesantías anualizadas al fondo de cesantías al cual pertenece o perteneció el actor, y que le fueran consignadas, en el año **2010 (Fondos Privados)** y **2011 (Fondo Nacional del Ahorro)**, conforme lo manifiesta el ente territorial en el propio acto demandado, y conforme a la jurisprudencia que sobre el tema ha expedido, tanto el Honorable Consejo de Estado como la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta 365 días por la mora anualizada, y no por los 360 días tal y como fueron reconocidos en la **Resolución No 8705 del 28 de octubre de 2015**.

QUINTO: CONDENAR a la entidad demandada, a que pague en favor del actor(a) el **100%** de la **SANCION MORATORIA**, habida cuenta que el funcionario público nunca fue citado dentro del proceso de reestructuración de pasivos para la aprobación del Acuerdo ni para que hiciera parte del mismo y se manifestara respecto del **reconocimiento y liquidación de su sanción moratoria**, como consecuencia de la inaplicación del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos por **INCONSTITUCIONAL**, según lo aquí solicitado.

SEXTO: CONDENAR a la entidad demandada a que sobre el valor total adeudado al actor, ordenar **INDEXAR** dicha suma de dinero, y no sobre el 70%, conforme lo hizo, liquidación que deberá de hacerse conforme al índice de Precios al Consumidor o al por mayor valor, tal como lo autoriza el CPACA, dando aplicación a la siguiente fórmula:

$$R = V_h \frac{\text{ÍNDICE FINAL}}{\text{ÍNDICE INICIAL}}$$

Donde R el valor presente se determina multiplicando el valor histórico (Vh), que es el valor a pagar por la sanción moratoria, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia), por el índice inicial, vigente para la fecha de su causación, es decir, a la fecha en que se origina la sanción moratoria.

SEPTIMO: ORDÉNESE a la entidad demandada, a que dé cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el artículo 192 del CPACA..

OCTAVO: CONDENAR en costas y agencias en derecho al demandado que estimo en un 30% sobre el valor de las sumas condenadas, de conformidad con lo ordenado en el artículo 188 del CPACA más los intereses corrientes y moratorios a que haya lugar.

Las anteriores peticiones respetuosas, tienen como fundamento los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: El Señor(a) **MARIA SONIA GARCIA GARCIA**, mediante solicitud radicada bajo el No **852144/10.11.2014**, dirigida al Departamento del Valle del Cauca, solicitó el reconocimiento y pago de la **SANCION MORATORIA** por la no consignación oportuna de los excedentes de sus cesantías generadas por el incremento salarial reconocido por el Departamento del Valle del Cauca, inicialmente en el año 2007, correspondiente a los años 2002 al 2006, y posteriormente por los

años 1997 al 2008. Y aquellos afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, se consignó en noviembre de 2011.

SEGUNDO: El Departamento del Valle del Cauca, mediante la **RESOLUCIÓN No 8705 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2015**, procede a reconocer y ordenar el pago de la **SANCIÓN MORATORIA**, por vía administrativa, dentro del marco del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, a **754** funcionarios administrativos del sector educativo, por la mora en la consignación de los excedentes de las cesantías como consecuencia de la homologación y nivelación salarial reconocida, a los fondos de cesantías en que se encuentran afiliados, tal y como lo estipula en el cuadro de la página No. 2 del acto demandado.

TERCERO: El acto administrativo fue notificado a su apoderado el día **05 DE NOVIEMBRE DE 2015**, quien renuncia a los términos de ejecutoria, quedando agotada la vía gubernativa, al no ser objeto de recurso de **APELACIÓN**.

CUARTO: A fin de cumplir con el requisito de procedibilidad, se acudió ante la Procuraduría General de la Nación, a fin de llevar a cabo Conciliación Extrajudicial, de que trata la Ley 1385 del 2009, sin que se llegara a acuerdo conciliatorio, y de la cual se anexa el documento correspondiente.

NORMAS VIOLADAS

Constitución Política: Art. 1º, 2º, 4º, 6º, 25, 53 y 209.
Legales: **Artículo 44 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo**; Ley 50 de 1990, artículos 99 y s.s..

CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

De conformidad a los hechos anteriormente enunciados, procedo a fundamentar jurídicamente los argumentos que se deben tener en cuenta para proteger los derechos fundamentales y los laborales conexos, así como los amparados por la ley 50/90 en sus artículos 99 y s.s., violentados por el **Departamento del Valle del Cauca**, en los siguientes términos:

El Título Primero de la Constitución Política establece los **PRINCIPIOS FUNDAMENTALES** que deben regir a Colombia. De estos principios se desprenden todas las normas y comportamientos que direccionan al Estado colombiano y sus ciudadanos. Desconocer estos principios fundamentales viola de frente la constitución política tal y como lo ha preceptuado insistentemente la Honorable Corte Constitucional, pues estos principios están ligados profundamente con los derechos fundamentales que se protegen bajo el amparo de la acción de tutela cuando se ven afectados.

En el artículo primero de la Carta, se establece que *“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria... fundada en el respeto de la dignidad humana...”* y en su artículo segundo establece que son fines esenciales del Estado: *“...garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución... la vigencia de un orden justo.*

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra... y demás derechos y libertades y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Inspirados en estos principios, la Constituyente de 1991 en un esfuerzo de democracia en la que participan todos los estamentos de las diferentes clases y niveles, preceptúan que existen unos derechos fundamentales que no pueden ser vulnerados en aras de las decisiones que puedan tomar quienes ejerzan el poder

administrativo o político en Colombia, así como los particulares que puedan desempeñar funciones de carácter público. La razón de ser del Estado es la plena e integral vigencia de los derechos humanos de tal manera que sus asociados se puedan realizar como personas, satisfaciendo sus expectativas y esperanzas.

Cuando entra en conflicto la normatividad a aplicar, llámese ley, decreto, resolución, acuerdo, etc., con la Constitución Política, el **artículo 4** de la carta magna expresamente ordena que se aplicara la norma suprema, razón por la cual, como en el presente caso, el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos implementado por el Departamento del Valle del Cauca, cuando pretendió sanear sus deudas, violenta flagrantemente derechos laborales, no puede ser aplicado en aquello que desconoce los principios rectores, máxime cuando dicho acuerdo de reestructuración de pasivos, ni siquiera convocó a sus acreedores a determinar el monto de la deuda, respecto de las sanciones moratorias en particular; sino que de manera general informa que las sanciones moratorias que se deban serán canceladas solo en el 70% de su valor; y **solo respecto de aquellas reconocidas en virtud de un fallo condenatorio.**

Ya el Consejo de Estado, en innumerables sentencias, se ha manifestado al respecto y ha sentado jurisprudencia sobre la inaplicabilidad de los Acuerdos de Reestructuración de Pasivos cuando se afectan derechos de tipo laboral, misma que se predica en el presente caso, y que la trae a colación la **Resolución 8705 de 2015** como fundamento legal para amparar el derecho reconocido, como lo es la Sentencia del 27 de enero de 2011, Expediente No. 080012331000200502065-01, Magistrada Ponente Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez (ver pie de página de la hoja 3 de la Res. 8705/15).

Al respecto dice la sentencia del 27 de enero de 2011, y muchas otras, lo siguiente:

“Observa la Sala, que las recientes tesis de la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre el reconocimiento de la sanción moratoria de las cesantías, establecen los siguientes lineamientos que serán tenidos en cuenta para la solución del sub-exámene:

1. *Los Acuerdos de Reestructuración de Pasivos laborales deben contar con la aprobación de los trabajadores, sin que puedan desconocer derechos ciertos e indiscutibles.*
2. *Los Acuerdos no pueden cercenar los derechos de los trabajadores que no consistieron en su aprobación y no pueden orientarse a evadir el pago de las obligaciones sino a rebajas, disminución de intereses y concesión de plazos o prórrogas.*
3. *Debe obrar prueba de que el trabajador haya consentido la aprobación del Acuerdo de Reestructuración o que la entidad haya dispuesto su citación para que se hiciera parte y manifestara lo que considerara oportuno respecto de la liquidación de las cesantías y su moratoria.*

Si bien la Ley 550 de 1999, prevé la posibilidad de que las Entidades Territoriales celebren Convenios de Reestructuración de Pasivos con la finalidad de hacerlas viables en su sostenimiento económico y financiero, es claro que tales Acuerdos se suscriben con el titular de la persona jurídica y los acreedores internos y/o externos, sin que ello implique obligatoriamente la presencia de los trabajadores o Servidores Públicos en la negociación del pago de sus acreencias y prestaciones laborales.

Es por ello que, el artículo 42 de la Ley 550 de 1999, permite que el trabajador individualmente, y en este caso el Empleado Público, acuerde condiciones laborales temporales especiales, como cuestión excepcional, pero sujeta a consideraciones de índole Constitucional, como bien lo advierte la Corte, consistentes en que cuando se presenta una disminución o recorte de la autonomía individual de los empleados que no han consentido las condiciones laborales temporales o cuando se vulneran derechos y garantías laborales que no están circunscritas en el contenido de dicho Acuerdo, devienen en inconstitucionales.

Por lo que, teniendo en cuenta que las personas naturales y jurídicas titulares de los créditos determinados en su existencia y cuantía por el Promotor del Acuerdo del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, quedó en firme el 14 de septiembre de 2002 (fl. 84), para la Sala es contundente que dicho Convenio fue suscrito con posterioridad al retiro del demandante (27 de abril de 2000), infiriéndose la ausencia del consentimiento como requisito para su existencia, demostrado en el sub-lite por cuanto no fue notificado para ser parte dentro del Acuerdo de Reestructuración, ni informado de la liquidación de los pasivos, contrario sensu a lo acontecido en el Expediente 0508-2009 donde se informó a la parte actora la apertura del proceso liquidatorio y la determinación de las cuantías a pagar lo que significó que una vez en firme la decisión se suspendiera la contabilización de la sanción moratoria puesto que quedó ejecutoriada.

Por tal razón, deviene la consecuencia de inaplicar por inconstitucional el Convenio de Reestructuración de Pasivos del Distrito de Barranquilla para el caso concreto, en lo que tiene que ver con el Acto demandado que evade la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, concordando las tesis expuestas por la Jurisprudencia.

En conclusión, una vez estudiados los argumentos expuestos en el recurso de apelación, y efectuada la liquidación respectiva, no queda otra vía que revocar la sentencia impugnada y en su lugar reconocer la sanción moratoria por el pago tardío de la cesantía conforme quedó indicado en la presente providencia.

Al liquidar las sumas dinerarias en favor de la demandante, los valores serán ajustados en los términos del artículo 178 del C.C.A., utilizando la siguiente fórmula:

$R = Rh \times \text{Índice final}$

Índice inicial

Según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el que corresponde a la prestación social, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria esta sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en que debería efectuarse el pago). Los intereses serán reconocidos en la forma señalada en el último inciso del artículo 177 del C.C.A., adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998."

No se explica cómo el Departamento del Valle del Cauca fundamenta su acto administrativo, donde vulnerar derechos y garantías laborales cuando recorta la autonomía individual de sus funcionarios, "sin su consentimiento", y cobijado en un manto legal (Ley 550/99), en aras de reestructurar sus deudas, en una jurisprudencia (la que arriba se transcribe y que usa el Departamento en las páginas 3 y 4 de la Resolución No 8705 de octubre 28 de 2015), que lo que precisamente advierte es que el Estado está llamado a proteger dichos derechos; y es por esto que se deberán restablecer los mismos a través de una sentencia favorable.

Es bueno dejar muy en claro que el Departamento del Valle del Cauca no reconoció todas las sanciones moratorias dentro del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, por cuanto sobre ello la "Cláusula 15" del mismo se refiere solo a "PROCESOS JUDICIALES ORDINARIOS". Y fue a través del Acta de fecha 31 de Agosto de 2015 (ver página 3 de la Resolución No 8705 del 28 de octubre de 2015), es decir, menos de dos meses antes de la expedición del acto aquí demandado, que se tomó la decisión de reconocer vía administrativa la sanción moratoria, por cuanto, repito, no había sido reconocida; reconocimiento hecho bajo los parámetros de la Cláusula 15 del Acuerdo, desconociendo la contundente jurisprudencia del Consejo de Estado, cuando hace un reconocimiento parcial de la acreencia, de forma unilateral y demás arbitraria, ya nunca notifico personalmente, repito, dentro del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, a mi cliente sobre el monto de la sanción a reconocer. Lo anterior queda demostrado cuando solamente el 31 de

agosto de 2015 toma la administración la decisión de reconocer dicha sanción moratoria.

Dentro del mismo contexto, la administración departamental procede a efectuar una indexación de la acreencia, no sobre el cien por ciento (100%) de la misma, sino sobre el setenta por ciento (70%) a reconocer, y aplicando como fechas para la actualización de la deuda, no desde el momento en que se configura la sanción, sino desde la fecha en que termina la sanción, es decir desde la fecha en que se produjo la consignación a los fondos de cesantías, y hasta la fecha en que el Departamento firma el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos en el año 2012; y no hasta la fecha en que se reconoce el derecho a la sanción, esto es, **hasta el 5 de noviembre de 2015**, fecha en que se notifica la **Resolución 8705 del 28 de octubre de 2015**, quedando ejecutoriada la misma fecha por haber renunciado el apoderado a los términos de ejecutoria del mismo. Con esto se desconoce completamente el alcance que la ley le otorga a la figura jurídica mediante la cual se pretende actualizar los valores adeudados por el fenómeno de la pérdida del valor adquisitivo de nuestro peso a través de la devaluación. Aplicar incorrectamente la fórmula o los períodos a indexar, como lo hizo el Departamento del Valle del Cauca, va en contravía de lo que la norma pretende, por ello, es menester ajustar los índices, conforme se debe actualizar correctamente la devaluación, y que deben coincidir con los siguientes parámetros. La indexación se debe aplicar, desde la fecha en que se produce la sanción moratoria, esto es, a partir del **15 de febrero del año a consignar y hasta el 5 de noviembre de 2015**, fecha en que queda ejecutoriada la Resolución No **8705 del 28 de octubre de 2015**.

Como el Departamento efectuó tres (3) reconocimientos por concepto de homologación y nivelación salarial, se debe ajustar la fecha inicial para calcular la indexación de conformidad a cada uno de los reconocimientos, así:

- 1-. Para aquellos a quienes se les reconoció la nivelación salarial en el año 2004, la fecha inicial para calcular la indexación es la del **15 de febrero de 2005**, fecha límite para efectuar la correspondiente consignación.
- 2-. Para aquellos a quienes se les reconoció la nivelación salarial en el año 2007. La fecha inicial para calcular la indexación es la del **15 de febrero de 2008**, fecha límite para efectuar la correspondiente consignación.
- 3-. Para aquellos a quienes se les reconoció la nivelación salarial en el año 2009. La fecha inicial para calcular la indexación es la del **15 de febrero de 2010**, fecha límite para efectuar la correspondiente consignación.

Ahora bien, el **Artículo 44 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo**, norma vulnerada por la entidad, es supremamente clara al establecer que la discrecionalidad de la decisión que tome la administración, como lo es el hecho de no liquidar y pagar las sanciones en que incurre la administración, cuando amparados en un proceso de reestructuración de pasivos, toma decisiones unilaterales e indiscriminadas, además de negarle la posibilidad del acreedor a su intervención dentro del mismo proceso para reclamar su sanción moratoria, debe ser que le sirven de causa en derecho para expedir el acto administrativo, decisión que vulnera dicho artículo, y vamos a ver por qué.

El **Departamento del Valle del Cauca**, desconoce de tajo lo preceptuado en la **Ley 50 de 1990, en su artículo 99 y s.s.**, cuando no liquida correctamente la sanción moratoria, a pesar de ser una norma obligatoria, por ser de carácter general y aplicable a todo tipo de Empleador o Fondo que reconozca las cesantías de los funcionarios públicos; siendo el responsable de este reconocimiento, por ser la entidad nominadora, quien expide el acto administrativo, y por otro lado, el encargado de cumplir con sus acreencias, así sea a través de un proceso de Reestructuración de Pasivos (Ley 550/99) como entidad pagadora.

En buena hora el Departamento del Valle del Cauca reconoce las sanciones moratorias por **vía administrativa**, evitando de esta forma las dificultades que

conllevar acudir a los despachos judiciales, cuando ya el Departamento ha sido condenado en más de 80 fallos a reconocer y pagar las sanciones de sus funcionarios por la falta de consignación de las cesantías a los fondos de cesantías y por la mora en el pago de los anticipos y definitivas. Pero peca cuando procede a liquidar dicha sanción desconociendo el carácter que la ley y la jurisprudencia le dan a los días que le corresponde liquidar por la sanción, puesto que solo la liquida tomando por cada año **360 días de mora y no los 365 días con los que se deben liquidar cada uno de los años dejados de consignar**, cuando son años consecutivos. Recordemos que el Departamento debía consignar la sanción de los años 1997 al 2008; y que además, no aplica correctamente los parámetros de la indexación, tal y como ya se comentó

Entrado en asuntos, el desconocimiento parcial que hizo el Departamento de los derechos laborales nacidos por el incumplimiento en la consignación oportuna de los excedentes de las cesantías, como consecuencia de una nivelación salarial que comprendía los años 1997 al 2008, y que no fueron consultados a los acreedores, por cuanto ni siquiera fue tomada en cuenta como acreencia dentro del Acuerdo de Reestructuración de pasivos, **referente a pagar solo el 70% del valor de la sanción moratoria**, viola la Constitución, y es por ello que, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han determinado que en este tipo de situaciones se debe decretar la inaplicabilidad del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos que evade, en este caso, parcialmente **el pago total de la acreencia**, puesto que, si bien es cierto la entidad territorial hace un llamado a sus acreedores, nunca lo hizo de forma individual respecto de la deuda por concepto de sanción moratoria, y tenía que ser de esta forma, por cuanto no había efectuado una liquidación de la misma, simplemente se manifestó de manera unilateral e inconsulta, de la forma en que pagaría una acreencia que no fue notificada concretamente a ninguno de sus acreedores y mal podrían ellos, hacer cualquier consideración o manifestación sobre algo que no estaba concretado en cifras, ni mucho menos habersele notificado de la acreencia para su consentimiento. Mal puede, en estas circunstancias, pretender cercenar derechos laborales bajo el argumento de estar el Departamento en Ley 550 de 1999.

CAUSALES DE NULIDAD

Alego como causal de nulidad del acto atacado las establecidas en los artículos **137 y 138 del CPACA**, por infringir las normas en que se fundamenta dicho acto administrativo, falsa motivación y habersele lesionado a la actora unos derechos amparados en la Constitución y la Ley.

CADUCIDAD

Me encuentro dentro de los términos establecidos en el **artículo 164, numeral 2º, literal d, del CPACCA**, para promover esta acción de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, pues la demanda se presenta dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecutoria del acto atacado.

COMPETENCIA Y CUANTIA

La competencia corresponde, en primera instancia, a Usted, señor Juez por la naturaleza de la acción y en razón del territorio, conforme lo establecen los **artículos 155 y 156 del CPACCA**, y por la cuantía, la cual estimo razonada en la suma de **CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$109160989)**, que corresponde al 30% del valor reconocido y no pagado más lo que corresponde al valor total de la deuda debidamente indexada.

PRUEBAS DOCUMENTALES

Ruego al señor Juez, se sirva tener en cuenta las siguientes pruebas documentales:

1ª. Apartes de la Resolución No. **8705 del 28 de octubre de 2015**, por la cual el Departamento del Valle del Cauca reconoce la **SANCIÓN MORATORIA** del personal administrativo con régimen anualizado de cesantías, en virtud del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, que corresponde a los considerandos, la parte donde figura mí mandante, y la última parte del acto administrativo. Ruego a Usted tener como prueba los apartes del acto por cuanto el mismo consta de 61 páginas y el archivo para PDF es imposible enviarlo a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2ª. Derecho de Petición de **radicación No 852144/10.11.2014** donde se solicita el pago de la sanción moratoria, dirigido al **Departamento del Valle del Cauca**.

3ª. Constancia expedida por la Procuraduría Delegada ante los Juzgados Administrativos donde se pide la convocatoria para adelantar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad para adelantar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

PETICION PARA QUE SE DECRETEN PRUEBAS

A fin de que se tenga una mayor información sobre los hechos de la demanda, solicito a su despacho, si a bien lo tiene, se ordene decretar las siguientes pruebas:

1.- Oficiar a la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca, ubicada en el Palacio de San Francisco, piso 8º, a fin de que envíen, con destino al proceso, copia certificada de la Resolución No. **8705 del 28 de octubre de 2015**.

2.- Si lo estima necesario, oficiar a la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca, a fin de que certifique si el actor solicitó mediante derecho de petición el reconocimiento y pago de la sanción moratoria y así mismo anexe copia certificada del mismo. La anterior prueba se pide en razón a que con una sola petición se relacionan varios funcionarios siendo imposible aportar para cada demanda el original del mismo, a pesar de que es el propio acto demandado que me reconoce la personería en mi calidad de representante de los que ahí se relacionan.

3.- Oficiar a la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca, proceda a enviar la **liquidación individual** efectuada en favor del demandante, donde se determine:

a-. Los días de mora por cada año liquidado.

b-. Si se tuvo en cuenta en la liquidación las horas extras, dominicales, festivos y recargos nocturnos correspondientes al **año 2.000**

c-. La fecha inicial y final con las cuales se procedió a aplicar los índices para liquidar la indexación de mí poderdante.

d-. Certificar si en la liquidación de la sanción moratoria se tuvo en cuenta los años 2007 y 2008.

PROCEDIMIENTO

El Ordinario regulado en el **Título V del CPACCA**.

ANEXOS

El poder legalmente otorgado para el efecto.
Los documentos anexos a la demanda.

Copia de la demanda y sus anexos para la notificación al demandado, para el archivo, para el Ministerio Público y para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

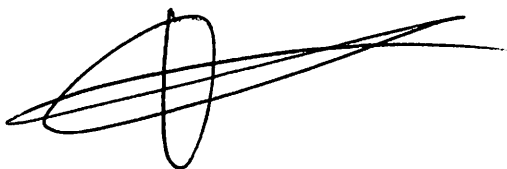
Demanda y anexos en medio magnético.

NOTIFICACIONES Y DIRECCIONES

El demandado y su representante legal que aparece en el encabezamiento de esta demanda o por quien sea o haga sus veces en el en el Palacio de San Francisco del Edificio de la Gobernación del Valle del Cauca, en la carrera 8ª con calle 10.

Al demandante y al suscrito en la Secretaría de su despacho, previa citación a mi oficina ubicada en el Edificio de la Bolsa de Occidente de la Calle 10 No. 4-40 oficina 311 de la ciudad de Cali. Correo electrónico: victordcastano@hotmail.com.

Atentamente,



VICTOR DANIEL CASTAÑO OVIEDO

C. C. 16.660.807 de Cali

T. P. 90.164 del C. S. J.



4 MAY 2016